

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°352

Medellín, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia, en la que se resuelven los recursos de apelación interpuestos en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **YANNET LILIANA MESA MEDINA** contra la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE-FUCN-**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el **1 de noviembre de 1997** y el **5 de mayo de 2016**, la cual terminó sin justa causa; y, que su empleador desconoció la inclusión de factores salariales para la liquidación de prestaciones sociales y cotizaciones a la seguridad social desde el 1 de septiembre de 2011.

Como consecuencia de estas declaraciones se condene a la demandada a reajustar las prestaciones sociales, vacaciones y cotizaciones a la seguridad social teniendo como base un salario de **\$7'928.000** y a reconocer y pagar la indemnización por despido injusto.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones se expresó que la actora fue contratada por la demanda el día **1 de diciembre de 1997** para desempeñarse como auxiliar contable-asistente administrativa, cargo modificado mediante *otro si*

del **17 de enero de 2011** a partir del cual prestó sus servicios como Directora Financiera.

El día **21 de abril de 2015**, la demandante y su empleador suscribieron un acuerdo de confidencialidad y separación de cargos, respecto al que venía desempeñando la actora y el señor **Juan Gabriel Zapata Correa**, lo que representó que le área contable quedara a cargo exclusivo de este último.

Mediante correo electrónico del **3 de mayo de 2016**, la actora fue citada a descargos por el presunto incumplimiento de sus funciones lo que arrojó pérdidas a la universidad por **\$5.746.847.000**.

En la audiencia no se le permitió controvertir las pruebas presentadas por el empleador y se procedió a terminar su contrato de trabajo.

El salario devengado durante el último año de servicios fue **\$5'460.000** y un sobresueldo por concepto de viáticos por su traslado a Medellín por un promedio mensual de **\$2'468.000**, sin que al momento de liquidar el valor de las prestaciones sociales el mayor valor fuera tenido en cuenta.

Así mismo, se abstuvo el empleador de consignar las cotizaciones a la seguridad social por el periodo comprendido entre el octubre de 1997 y abril de 2003, pese a que fueron descontados.

Contestación de la demanda

Una vez notificada la Fundación demandada dio respuesta a los hechos indicando que la relación laboral entre las partes no fue continua, siendo interrumpida entre **28 de abril de 1998** y el **1 de abril de 2003**, fechas entre las cuales la demandante a través de una persona jurídica denominada *Digital Growth* prestó los servicios contables a través de un contrato de prestación de servicios, no existiendo en ese periodo la obligación de realizar aportes en al Sistema de Seguridad Social por parte de esa entidad.

Expresa en lo referente a las funciones de la demandante, que las mismas fueron claras y conocidas por esta, toda vez que, su cargo fue producto de una fusión de áreas para que fueron lideradas por una sola persona quien debía cumplir con los perfiles de Director financiero y Director Administrativo, los que por demás conocía desde el momento en que asumió los diferentes cargos con la suscripción de los *otro sí*.

En lo referente al acuerdo de confidencialidad señala que el mismo es cierto precisando que su fecha fue **21 de abril de 2016** y que su finalidad fue separar a la demandante y al contador de sus cargos mientras se analizaban unos

hallazgos contables a través de una auditoria adelantada por la institución, que permitió determinar el grave incumplimiento de las funciones de la demandante y la posterior terminación de su contrato de trabajo, previa audiencia de descargos.

Aceptó que el salario de la demandante fue **\$5'460.000** y que recibía un pago mensual como prima de alimentación y transporte, no constitutiva de salario, de conformidad con pacto verbal de las partes.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: despido con justa causa, prescripción, pago, ausencia de causa para pedir, inexistencia de obligaciones de pago, mala fe de la demandante, buena fe de la demandada y compensación.

Sentencia de Primera Instancia

El Juez Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **7 julio de 2021**, declaró que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el **1 de diciembre de 1997** y el **5 de mayo de 2016**; y, en consecuencia, condenó a la **FUCN** a reconocer y pagar los aportes a la AFP a la que se encuentre afiliada por el periodo comprendido entre el **1 de julio de 1999** y el **30 de marzo de 2003**, así mismo, condenó a la demandada a reconocer el pago de la suma de **\$5'910.576**, valor liquidado como liquidación final de prestaciones sociales, cifra que ordenó indexar al momento del pago.

En lo referente a las demás pretensiones de condena se abstuvo de condenar a la demandada del reconocimiento de las mismas, indicando en particular en lo referente a los valores reconocidos por el empleador que la prueba testimonial permitía inferir la existencia de los mismos pero que estos estuvieron destinados de forma específica a cubrir los gastos de transporte de la demandante entre Santa Rosa y Medellín, no pudiendo ser incluidos como factor salarial para los aportes en pensiones y la liquidación de las prestaciones sociales.

Esta decisión no la compartieron los apoderados de las partes, motivo por el cual la recurrieron en los siguientes términos:

Recurso parte demandante

La apoderada de la parte demandante solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia, por cuanto a su poderdante se le imputó una responsabilidad objetiva por un mal manejo contable, máxime cuando se trató de unos hallazgos de errores contables que venían desde el año 2015 y que eran atribuibles al contador y al revisor fiscal.

Resalta que el mal manejo fue contable, pero no financiero que era el cargo de la demandante, siendo su labor dependiente de la información que le suministrara el contador, no pudiéndosele imputar una responsabilidad subjetiva a la demandante.

En lo referente a los viáticos periódicos señala que los mismos por ser permanentes deben ser tenidos como salariales, por cuanto no pueden ser simplemente atribuidos a transporte como lo hizo el juez a-quo.

Finalmente indica que al demostrarse que la parte demandada se abstuvo de pagar la liquidación final de prestaciones sociales, sin que existiera una causa atendible se debe imponer el pago de la sanción moratoria del artículo 65 del CST.

Recurso parte demandada

El recurrente solicita que no se imponga el pago de la liquidación final de prestaciones sociales, por cuanto la entidad luego de terminar el contrato de trabajo encontró que existían unas deudas mutuas con su trabajadora, las que procedió a compensar conforme se lo autoriza la jurisprudencia.

Por otra parte, se opuso a la declaratoria de unidad de contrato, por cuanto a su juicio existen elementos que dan cuenta de la existencia de varios contratos de diferente naturaleza entre las partes, que pueden ser diferenciables en sus extremos, debiéndose por lo demás anotar que en el periodo por el que se condena al pago de aportes a pensiones la demandante actuó a través de una persona jurídica que presentaba cuentas de cobro por los servicios prestados.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, el apoderado de la demandada presentó alegaciones en las que solicitó que se **revoque** la decisión de primera instancia en los desfavorable, destacando en lo referente a la continuidad del contrato de trabajo que existió una interrupción del vínculo entre las partes para el periodo comprendido entre el 28 de abril de 1999 y el 1 de abril de 2003, afirmación que sustenta en el contenido a Acta 017 del Consejo Directivo de la demanda que no le fue posible aportar con la contestación de la demanda-pero que aportó en desarrollo de la segunda instancia- y que da cuenta que en ese periodo las partes tuvieron un contrato civil de prestación de servicios.

En lo referente al recurso interpuesto por la parte actora destaca que no debe prosperar toda vez que se demostró que los pagos realizados a la demandante

se destinaban a transporte y que se configuró la justa causa para la terminación del contrato de trabajo.

Por su parte la apoderada de la demandante insistió en que se reconociera el carácter de salarial de los viáticos y el pago de la indemnización por despido injusto, lo cual sustentó en las razones expuestas al momento de interponer el recurso de apelación.

CONSIDERACIONES

Problema Jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia de conformidad con los recursos interpuestos, serán: (i) Establecer si entre las partes existió un solo contrato de trabajo cuyos extremos fueron entre el **1 de diciembre de 1997** y el **5 de mayo de 2016** o contrario a ello se presentaron varios vínculos contractuales de diferente naturaleza; (ii) Determinar si el empleador demostró la existencia de una justa causa para la terminación del contrato de trabajo, (iii) Establecer si las sumas reconocidas por el empleador por concepto de viáticos constituyen factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y pago de aportes al sistema de seguridad social, (iv) Determinar si el empleador incurrió en retención indebida de salarios al abstenerse de pagar la liquidación final de prestaciones sociales de su trabajadora y (v) revisar si procede la condena al pago de la sanción moratoria por el pago de prestaciones con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. Entre la señora **Yannet Liliana Mesa Medina** y la **FUCN** se suscribió contrato de trabajo el **1 de diciembre de 1997**, para desempeñar el cargo de Auxiliar Contable (04/págs.115-116).
2. Este contrato fue modificado a través de *otro sí* del **17 de enero de 2011**, fecha a partir de la cual la demandante se desempeñaría en el cargo de **Coordinadora Financiera** (04/págs.117-118).
3. Este a su vez fue modificado, nombrándosele a partir del **1 de septiembre de 2011** como **Directora Financiera** (04/págs.119-120).

4. En ese documento se pactaron las siguientes responsabilidades a cargo de la demandante:
 - 1) Planear, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las finanzas de la institución.
 - 8) Coordinar la elaboración de los estados financieros.
 - 13) Controlar presupuestalmente los pagos e informar al Rector sobre las variaciones significativas que se presenten en los mismos.
5. La **FUCN** mediante Acuerdo 03 del 23 de julio de 2012 nombró a la señora **Yannet Liliana Mesa Medina** como Directora Administrativo-Financiera (04/págs.23-24).
6. Conforme se confiesa en el hecho 5 de la demanda, la actora suscribió el acuerdo de confidencialidad y notificación de separación de funciones por problemas de registros contables dependientes de la dirección administrativa y financiera que revestían gravedad para la institución con entes de control y entidades financieras, donde se dispuso el pago de salarios y la separación de funciones (04/págs.121-122).
7. El día **3 de mayo de 2016**, la actora fue llamada a descargos por el incumplimiento de sus funciones como Directora Administrativa y Financiera, en concreto por omitir vigilar el presupuesto y revisar los estados financieros de cada año (04/págs.133-138).
8. Mediante comunicación del **4 de mayo de 2016**, la demandante dio respuesta al llamado a descargos realizado por el Director de Gestión Humana y Teletrabajo, indicándole en lo fundamental que las faltas endilgadas no hacían parte de funciones propias de su cargo, siendo las mismas atribuibles al contador (04/págs.2-3).
9. El día **5 de mayo de 2016**, la **FUCN** comunicó a su trabajadora la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo por la omisión grave de las funciones propias de su cargo, en particular las consagradas en los numerales 1,8 y 13, consistentes en: planear, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las finanzas de la institución; coordinar la elaboración de los estados financieros y controlar presupuestalmente los pagos e informar al Rector sobre las variaciones significativas que se presenten en los mismos (04/págs.157-158).
10. En esa misma fecha, el empleador realizó la liquidación final de prestaciones sociales, para la cual tuvo en cuenta como fecha de inició el 1 de diciembre de 1997, teniendo en cuenta como asignación salarial la suma de **\$5'460.000** (04/pág.36).

Efectuadas las anteriores anotaciones de orden fáctico, procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

De la existencia de contratos de diferente naturaleza entre las partes

El apoderado de la **FUCN** se opone la declaración de que entre las partes existió un solo contrato de naturaleza laboral, expresando que como lo afirmó con la contestación de la demanda entre el **28 de abril de 1998** y el **1 de abril de 2003**, la actora prestó sus servicios a la demandada de forma independiente, y que, aunque no se cuenta con el contrato suscrito por las partes por pérdida del mismo, existen otras pruebas como las cuentas de cobro presentadas por esta, que informan que el prestador del servicio era la persona jurídica *Digital Growth*.

Referente a este argumento, la Sala encuentra que en efecto al proceso fueron aportadas por parte de la Fundación demandada varias cuentas de cobro presentadas por la señora **Yannet Liliana Mesa Medina** como representante legal de *Digital Growth*, sin embargo, estos documentos no dan cuenta de que la demandante actuara con completa independencia y autonomía en desarrollo de la prestación personal del servicio, aspecto que era el relevante cuando lo que se buscaba era desvirtuar la presunción del artículo 24 del CST.

Por lo demás, se debe destacar que la versión de la existencia de varias relaciones de diferente naturaleza entre las partes, carece de soporte probatorio en la medida que no fueron traídos al proceso elementos que den cuenta de la presencia de una solución de continuidad entre un contrato y otro, extrañándose por ejemplo la existencia de la liquidación final de prestaciones sociales para el año 1999 y contrario a ello se advierte, que, solo se presenta un contrato de trabajo suscrito el **1 de diciembre de 1997** y posteriores otro sí firmados en el año 2011 y la certificación expedida por la propia **FUCN** el día **11 de julio de 2017**, en la que el Director de Talento Humano y Teletrabajo hizo constar que la actora prestó sus servicios a esa institución en calidad de auxiliar contable, asistente administrativa entre el 1 de diciembre de 1997 y el 16 de enero de 2011 (04/pág.123).

Finalmente se encuentra en la liquidación final de prestaciones sociales realizada por la demandada, en la que se encuentra que la fecha de ingreso de la demandante fue el **1 de diciembre de 1997** y la final el **5 de mayo de 2016** (04/pág.36).

En este punto se debe destacar que, si bien en el transcurso de la segunda instancia el apoderado de la parte demandante aporta una serie de documentos pretendiendo su valoración probatoria, es de advertir que dicho momento no es

la etapa procesal para la aportación de las pruebas, máxime cuando estas no fueron pedidas ni decretadas en la primera instancia.

En ese orden de ideas siguiendo el mandato del artículo 60 del CPT y SS cuando establece que se deben analizar aquellas pruebas allegadas en tiempo, es evidente para la Sala que existe una ausencia absoluta de elementos que den cuenta de la versión de la interrupción del contrato de trabajo propuesta por el empleador y la confirmación de su tesis de que entre las partes existieron múltiples contratos entre ellas uno civil por el periodo comprendido entre el **1 de julio de 1999** y el **30 de marzo de 2003**, las que llevan a concluir que entre las partes existió un solo contrato de trabajo vigente entre el **1 de diciembre de 1997** y la final el **5 de mayo de 2016**, debiéndose en consecuencia, **confirmar** en este aspecto la decisión apelada.

De la justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo

Se sostiene por parte de la apoderada recurrente que no se configura la justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo existente entre las partes, por cuanto las faltas atribuidas a su representada no se encontraban dentro del ámbito de sus competencias y no fue demostrada que existiera una conducta de su parte que configurara las mismas.

En lo referente a este argumento, vale la pena revisar cuales fueron las razones aducidas por el empleador en el comunicado del **5 de mayo de 2016** a través del cual informó a la demandada de su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo aduciendo una justa causa (04/págs.157-158), oportunidad en la cual se le atribuyó el incumplimiento grave de 3 de sus funciones como Directora Administrativa y Financiera, a saber: planear, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las finanzas de la institución, Coordinar la elaboración de los estados financieros y Controlar presupuestalmente los pagos e informar al Rector sobre las variaciones significativas que se presenten en los mismos.

Referente a esta imputación se defiende la demandante negando que le correspondieran estas funciones y radicando la responsabilidad en los directos implicados en la realización y presentación de los estados financieros que para el caso eran el contador y el revisor fiscal.

En lo que toca con la manifestación de la actora de que las omisiones que se le imputaron, no le eran atribuibles por cuanto que no se encontraban en las funciones propias de su cargo como Directora Administrativa y Financiera, es apenas necesario expresar que dicha afirmación pierde cualquier convicción si se leen dos documentos que fueron aportados con la presentación de la demanda que dan cuenta de forma clara de las funciones propias del cargo de la demandante, estos son: (i) el *otro sí* que suscribió el **1 de septiembre de**

2011 en cuyo anexo se encuentran descritas las responsabilidades específicas del cargo de Director Financiero y (ii) la certificación de cargo y funciones expedida el 11 de junio de 2017, en donde se reitera la “*funciones específicas financieras*” (04/págs.123-130), siendo por tanto innegable que las omisiones atribuidas a la demandante hacían parte de sus funciones.

Ahora, con respecto al argumento de que mediante acuerdo de confidencialidad la funciones del contador y la Directora Administrativa y Financiera fueron separadas, tal afirmación constituye una lectura equivocada de ese documento, pues en el mismo claramente se indicó que se procedía a separar a la demandante y al contador de sus cargos para adelantar investigación por problemas en los “...registros contables dependientes de la dirección administrativa y financiera...” (04/pág.121), documento que desde luego da cuenta de la sujeción y control que debía ejercer la demandante sobre los mismos.

Lo anterior, implica como lo expresó el juez de primera instancia que existía una responsabilidad directa de la demandante, pues en virtud de sus funciones como asesora financiera, su labor implicaba: planear, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las finanzas de la institución y coordinar la elaboración de los estados financieros, advirtiéndose que no se le responsabiliza de las anomalías en los informes contables, sino de la omisión en sus funciones que de control, evaluación y coordinación.

En lo relativo a la situación de la existencia de inconsistencias en los estados financieros para el año 2015, es reiterativa la prueba documental y testimonial, en este sentido es clara la testigo **Yenny Liliana Cañas Rojas** quien relata que como Gerente de Proyectos alertó al contador sobre los errores contables en los mismos, lo que se corroboró luego con la auditoria interna realizada por la demandada, cuyos hallazgos en detalle narró la testigo **Paula Andrea Palacios Zapata**.

En ese orden teniendo en cuenta las serias fallas que tenían estos informes, lo que se reprochó a la demandante no fue su elaboración, pues claramente no era competente para realizarlos, lo que se le atribuye es una falta de evaluación y control de los mismos, pues como ella misma lo admite al revisarlos no encontró nada anormal por lo que presentó sus propuestas con base en los mismos, fallando al evaluar las finanzas de la Universidad y generando una situación grave para la institución, que si bien no se tradujo en pérdidas económicas, como lo narra el testigo **Daniel Arcila Posada** si ocasionó para la Institución una situación de crisis por la que se demoró en el pago de nóminas y debió despedir a varios empleados y la imposibilidad de desarrollar nuevos proyectos.

En el anterior orden de ideas, es claro que para la Sala que el despido de la demandante tuvo origen en sus omisiones (conducta subjetiva propia) de control, evaluación y coordinación, por lo que en este aspecto le asistió al juez de primera instancia en su decisión, por lo que se **confirmará**.

De la prueba de los factores salariales

Se solicita por parte de la apoderada de la demandante que se declare que la demandante recibía un sobresueldo por concepto de viáticos, y que al no ser posible establecer cuál era su destinación, por no especificarse el valor de los conceptos deben reputarse como salariales y ser incluidos como factores salariales.

Referente a esta solicitud, se debe indicar que desconoció el juez de primera instancia, la prueba documental que fuera aportada por la fundación enjuiciada con la contestación de la demanda que milita en el archivo 12 y en la que se aprecia a partir de la página 310, documentos denominados relación de gastos de viaje para la empleada **Yannet Liliana Mesa Medina** que desde el 16 de enero de 2012 dan cuenta de los desplazamientos semanales realizados por la demandante y de las sumas totales destinadas a transporte y alimentación.

Estos documentos permiten establecer lo siguiente: (i) los pagos realizados a la actora tenían como finalidad cubrir los gastos de traslado desde el lugar donde habitualmente prestaba sus servicios a otro dispuesto por el trabajador, (ii) tales desplazamientos se originaban en un requerimiento del empleador, (iii) eran propios del cargo de la demandante y (iv) tenían un criterio de habitualidad por cuanto mensualmente la actora debía realizar en varias ocasiones su desplazamiento.

En ese orden siguiendo las enseñanzas de la sentencia SL-4824-2020, esta Sala concluye que los mismos tienen la calidad de viáticos permanentes pues el traslado de un lugar a otro era regular y frecuente, por lo que debe reconocérseles incidencia salarial en su componente alimentario y de alojamiento por así disponerlo claramente el artículo 130 del CST, sin que en este punto sea aceptable algún acuerdo en contrario.

En ese orden, al ofrecer la documental una clara discriminación en los conceptos pagados desde el año 2012, procedió la Sala a efectuar su cálculo desde esa anualidad hasta la fecha de terminación del contrato, los valores y página de la cual fueron tomados se contienen en la siguiente tabla:

Desde	Hasta	Alimentación	Transporte	Págs.	Cotización Adicional SGP
01/01/2012	31/01/2012	\$ 100.000	\$ 150.000	311	\$ 100.000

01/02/2012	29/02/2012	\$ 288.000	\$ 220.000	313,317,320,325	\$ 288.000
01/03/2012	31/03/2012	\$ 75.000	\$ 145.000	329,331	\$ 75.000
01/04/2012	30/04/2012	\$ 60.000	\$ 60.000	341,346	\$ 60.000
01/05/2012	31/05/2012	\$ 319.000	\$ 295.000	352,355,357	\$ 319.000
01/06/2012	30/06/2012	\$ 246.000	\$ 280.000	359,361, 364,370	\$ 246.000
01/07/2012	31/07/2012	\$ 170.000	\$ 180.000	373,378,380,381	\$ 170.000
01/08/2012	31/08/2012	\$ 202.000	\$ 218.000	382,385,395,398,401	\$ 202.000
01/09/2012	30/09/2012	\$ 182.000	\$ 238.000	403,406,411	\$ 182.000
01/10/2012	31/10/2012	\$ 272.000	\$ 240.000	418,420,423,426	\$ 272.000
01/11/2012	30/11/2012	\$ 200.000	\$ 400.000	431,433,436,437	\$ 200.000
01/12/2012	31/12/2012	\$ 90.000	\$ 610.000	439,444,452,455	\$ 90.000
01/01/2013	31/01/2013	\$ 120.000	\$ 120.000	548	\$ 120.000
01/02/2013	28/02/2013	\$ 30.000	\$ 30.000	551	\$ 30.000
01/03/2013	31/03/2013	\$ 270.000	\$ 270.000	554,556,558	\$ 270.000
01/04/2013	30/04/2013	\$ 68.000	\$ 52.000	463,464	\$ 68.000
01/05/2013	31/05/2013	\$ 204.000	\$ 126.000	469	\$ 204.000
01/06/2013	30/06/2013	\$ 0	\$ 0		\$ 0
01/07/2013	31/07/2013	\$ 0	\$ 0		\$ 0
01/08/2013	31/08/2013	\$ 590.267	\$ 619.900	477,479,487	\$ 590.267
01/09/2013	30/09/2013	\$ 299.763	\$ 423.600	487	\$ 299.763
01/10/2013	31/10/2013	\$ 262.500	\$ 422.500	507	\$ 262.500
01/11/2013	30/11/2013	\$ 224.200	\$ 499.300	530	\$ 224.200
01/12/2013	31/12/2013	\$ 137.200	\$ 285.200	520	\$ 137.200
01/01/2014	31/01/2014	\$ 304.219	\$ 398.700	578	\$ 304.219
01/02/2014	28/02/2014	\$ 177.588	\$ 276.800	572,596	\$ 177.588
01/03/2014	31/03/2014	\$ 434.199	\$ 365.000	596,604,609	\$ 434.199
01/04/2014	30/04/2014	\$ 271.000	\$ 245.500	609,619	\$ 271.000
01/05/2014	31/05/2014	\$ 266.200	\$ 459.400	619,638	\$ 266.200
01/06/2014	30/06/2014	\$ 243.500	\$ 246.113	638,653	\$ 243.500
01/07/2014	31/07/2014	\$ 188.390	\$ 509.922	653,664	\$ 188.390
01/08/2014	31/08/2014	\$ 333.135	\$ 276.100	664	\$ 333.135
01/09/2014	30/09/2014	\$ 454.000	\$ 556.300	674,688	\$ 454.000
01/10/2014	31/10/2014	\$ 188.700	\$ 157.600	688	\$ 188.700
01/11/2014	30/11/2014	\$ 0	\$ 0		\$ 0
01/12/2014	31/12/2014	\$ 0	\$ 0		\$ 0
01/01/2015	31/01/2015	\$ 269.700	\$ 300.500	704	\$ 269.700
01/02/2015	28/02/2015	\$ 377.759	\$ 401.500	703,712	\$ 377.759
01/03/2015	31/03/2015	\$ 279.600	\$ 327.800	705,712	\$ 279.600
01/04/2015	30/04/2015	\$ 259.400	\$ 323.890	712,716	\$ 259.400
01/05/2015	31/05/2015	\$ 194.900	\$ 565.700		\$ 194.900
01/06/2015	30/06/2015	\$ 234.400	\$ 726.704		\$ 234.400
01/07/2015	31/07/2015	\$ 0	\$ 0		\$ 0
01/08/2015	31/08/2015	\$ 0	\$ 0		\$ 0
01/09/2015	30/09/2015	\$ 0	\$ 0		\$ 0
01/10/2015	31/10/2015	\$ 0	\$ 0		\$ 0
01/11/2015	30/11/2015	\$ 212.300	\$ 225.000	748	\$ 212.300
01/12/2015	31/12/2015	\$ 402.000	\$ 553.300	748,753	\$ 402.000
01/01/2016	31/01/2016	\$ 0	\$ 0		\$ 0
01/02/2016	29/02/2016	\$ 0	\$ 0		\$ 0

01/03/2016	31/03/2016	\$ 0	\$ 0		\$ 0
01/04/2016	30/04/2016	\$ 0	\$ 0		\$ 0
01/05/2016	05/05/2016	\$ 0	\$ 0		\$ 0

A partir de la anterior prueba y como quiera que el empleador desconoció en la contestación la naturaleza salarial que tenían los pagos de los viáticos efectuados a la demandante por alimentación y alojamiento, resulta procedente una vez conocido el valor de los mismos, condenar al reajuste de los aportes en pensiones para los meses en que tuvieron incidencia, teniendo en cuenta además que por tratarse de dineros destinados a financiar la pensión de vejez como derecho irrenunciable no son susceptibles de prescripción¹.

Con fundamento en lo expuesto se **revocará** la decisión de primera instancia en cuanto **absolvió** a la demandada de esta pretensión, por lo que en consecuencia **condenará** a la **Fundación Universitaria Católica del Norte** a pagar la cotización por el mayor valor contenido en la columna denominada “Cotización Adicional SGP” en la cifra y periodo allí anotado a la administradora de pensiones a la que se encuentra afiliada la señora **Yannet Liliana Mesa Medina**.

De la incidencia de los factores salariales en la liquidación de prestaciones sociales

Se reclama por parte de la demandante el reajuste de las prestaciones sociales teniendo en cuenta la incidencia de los viáticos, pretensión en la que le asiste razón, por cuanto al tratarse de conceptos que integran el salario tienen una relación directa con la liquidación de las prestaciones, sin embargo, antes de adentrarse en operaciones matemáticas es necesario tener en cuenta que con la contestación de la demanda se propuso la excepción de prescripción, lo que tiene una implicación en la extinción de los derechos reclamados por el paso del tiempo.

En ese sentido debe tenerse en cuenta que el artículo 488 del CST establece que: “*Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible...*”, indicando a su vez el artículo 489 de ese estatuto que “*...El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez...*”

¹Sentencia SL-1473-2021: “Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse frente a la controversia planteada por la sociedad recurrente, en el sentido de que los aportes pensionales al sistema de seguridad social son un elemento constitutivo y fundamental del derecho a la pensión, de manera tal que, los reclamos relacionados con la falta de afiliación al sistema de pensiones o la ausencia de pago de las cotizaciones, así como las consecuencias derivadas de dichas omisiones, no están sometidos a la prescripción extintiva y, por tal razón, se pueden reclamar en cualquier tiempo.

En el caso de autos una vez revisados los anexos de la demanda no se advierte que la trabajadora realizara reclamación escrita por sus derechos al empleador, por lo que la prescripción se interrumpió con la prescripción con la presentación de la demanda radicada el **19 de diciembre de 2018** (02/pág.07), lo que implica que los derechos exigibles con anterioridad al **19 de diciembre de 2015** se encuentran afectados por la prescripción quedando a salvo en este caso el mayor valor de los auxilios de cesantía por tratarse de una prestación que se hace exigible a la terminación del contrato (sentencias CSJ SL4633-2021 y CSJ SL1639-2022), el reajuste de la prima de servicios del segundo semestre del año 2015 por ser exigible hasta el 20 de diciembre (art.306 CST) y los intereses a las cesantías correspondientes al año 2015 por ser exigibles en el mes de enero de 2016 (ordinal 2°, art.1, Ley 52/75).

Se deja expresa constancia que no se efectúa reajuste sobre las vacaciones porque se desconoce el periodo en el cual fueron disfrutadas, elemento fundamental para la liquidación pues a voces del artículo 192 del CST las mismas se remuneran con el salario ordinario devengado el día en que se comience a disfrutar de ellas.

Se anota que para el año 2016 no hay lugar al reajuste solicitado, puesto que, no aparece prueba de los pagos que por concepto de viáticos recibiera la demandante, sin que de los estados de cuenta aportados de la demandante (04/págs.104-109) se puede establecer el reconocimiento de estos conceptos, pues si bien en los mismos aparece pagos por nómina estos no están discriminados y en todo caso sumados para cada mensualidad no superan el valor del salario percibido por la demandante para esa anualidad en la suma de **\$5´460.000²**, por lo que no se puede establecer si quiera sumariamente la incidencia de un sobresueldo.

Bajo ese entendido, conocidos aquellos conceptos sobre los que no operó la prescripción se realizaron los cálculos de los mayores valores que dejó de reconocer el empleador encontrando lo siguiente:

Reajuste Auxilio de cesantía

	Año	Mayor valor	Días	Total
Auxilio de cesantía	2012	\$ 183.667	360	\$ 183.667
	2013	\$ 183.828	360	\$ 183.828
	2014	\$ 238.411	360	\$ 238.411
	2015	\$ 185.838	360	\$ 185.838
				\$ 791.743

Reajuste Prima de servicios segundo semestre 2015³

² enero: \$688.474, febrero \$778.852, marzo: \$1´317.870, abril: \$885.580.
³ Se liquidó teniendo en cuenta el ingreso del respectivo semestre, lo que arrojo una base de **\$102.383**.

	Año	Mayor valor	Días	Total
Prima de servicios	2015-02	\$ 102.383	180	\$ 51.192

Reajuste intereses a las cesantías 2015

	Año	Cesantía	Días	Total
Intereses cesantías	2015	\$ 185.838	360	\$ 22.301
				\$ 22.301

Conforme con lo anteriormente indicado se **revocará** la decisión de primera instancia; y, en su lugar se **condenará** a la **Fundación Universitaria Católica del Norte** a reconocer y pagar a la señora **Yannet Liliana Mesa Medina**, los valores y conceptos arriba mencionados, cifras que deberán ser indexadas al momento de su pago teniendo en cuenta la fecha de su exigibilidad.

De la retención de la liquidación final de prestaciones sociales

El juez de primera instancia al encontrar alegada y probada la falta de pago del valor contenida en la liquidación final de prestaciones sociales, **condenó** al empleador al reconocimiento y pago de los valores contenidos en la misma, toda vez que no demostró el empleador haberlos pagado.

A esta condena se opone el apoderado de la parte demandada argumentando que la suma de **\$5'910.576** en efecto fue retenida por el empleador, puesto que la demandante tenía deudas con él que eran superiores a este valor por lo que se procedió a compensarlas, aduciendo que tal actuar se encuentra avalado por la jurisprudencia en el entendido que una vez termina el contrato de trabajo desaparece la subordinación y es posible que los créditos exigibles entre ambas partes sean compensados.

Referente a esta manifestación encuentra la Sala que parte de una premisa veraz cuyo desarrollo puede observarse en la sentencia SL16794-2015, en la que la Corte Suprema de Justicia indicó que una vez terminado el contrato es admisible que el empleador acuda a la figura de la compensación como modo para extinguir las obligaciones, entre ellas, la del trabajador de satisfacer los créditos existentes.

En tal sentido es una carga del empleador demostrar la existencia y exigibilidad del crédito en virtud del cual realiza la compensación y esa prueba se encuentra totalmente ausente en el proceso de autos, pues el dicho del empleador no pasa de ser una afirmación que nunca se probó a lo largo del proceso por lo que incurrió en una retención indebida de la liquidación final de prestaciones, por lo que debe en consecuencia proceder con el pago de los

valores dejados de cancelar contenidos en la misma, **confirmándose** en este punto la decisión apelada.

De la sanción moratoria por el no pago de prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo

Por último, se cuestiona por parte de la apoderada de la parte demandante que no se impusiera por parte del juez a-quo la condena al pago de la sanción moratoria del artículo 65 del CST, por cuanto se cumplen los presupuestos para su imposición en la medida que se quedaron adeudando prestaciones sociales a la terminación del contrato y no existe la demostración de una buena fe por parte del empleador.

En lo referente a esta solicitud advierte la Sala que la misma no fue objeto de pretensión en la demanda y en tal sentido escapó a la fijación del litigio que realizará el juez de primera instancia, tanto así que en la sentencia no se realizó pronunciamiento sobre la misma, por lo que no puede introducirse esta petición por vía del recurso, puesto que un actuar en tal sentido desconoce el principio de consonancia y la garantía de defensa de la demanda.

Lo anterior teniendo en cuenta, que, si bien con base en las facultades extra petita el juez le impuso a la demandada el pago del valor de la liquidación de prestaciones sociales, esto no la habilita a la actora para reclamar con base en esta condena la imposición de una sanción moratoria, por cuanto esa pretensión que no tiene el carácter de irrenunciable es totalmente autónoma y se soporta sobre otras circunstancias como la conducta del empleador.

Así las cosas, encuentra la Sala que la no haber sido una pretensión de la demanda no es posible un pronunciamiento en lo referente a la sanción moratoria que por vía recurso de apelación se introduce al proceso.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada por el Juez Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, el día **7 de julio de 2021**, en el proceso ordinario laboral adelantado por la señora **YANNET LILIANA MESA MEDINA** contra **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE**, **REVOCÁNDOLA** en cuanto absolvió a la demandada el reajuste de las prestaciones sociales y las cotizaciones al sistema de seguridad social de pensiones, para en su lugar **CONDENAR** a la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE** a reconocer y pagar los siguientes valores, teniendo en cuenta sobre los derechos prestacionales exigibles con anterioridad al 19 de diciembre de 2015 se encuentran prescritos:

Auxilio de cesantía:	\$ 791.743
Intereses cesantías 2015:	\$ 51.192
Prima de servicios 2015-02:	\$ <u>22.301</u>
	\$ 865.236

Estos valores deberán ser indexados al momento de su pago teniendo en cuenta la fecha de su exigibilidad.

Así mismo, se **CONDENA** a la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE** a pagar la cotización por el mayor valor contenido en la columna denominada “Cotización Adicional SGP” en la cifra y periodo allí anotado a la administradora de pensiones a la que se encuentra afiliada la señora **YANNET LILIANA MESA MEDINA**.

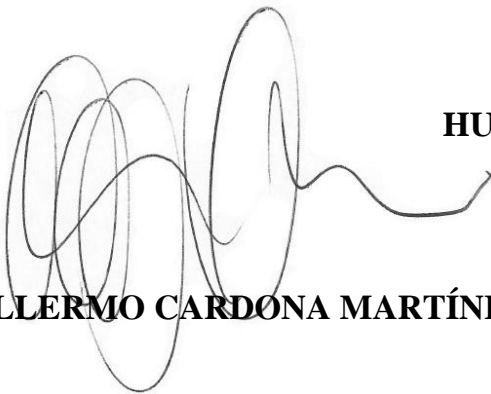
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Yannet Liliana Mesa Medina
Demandado	Fundación Universitaria Católica del Norte
Radicado	05001-31-05-021-2019-00004-01
Decisión	Confirma y revoca sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 24 de noviembre de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 24 de noviembre de 2022 a las 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO